

Aguascalientes, Aguascalientes; a treinta de septiembre del dos mil veintiuno.

## SENTENCIA

**VISTOS** para resolver mediante sentencia definitiva los autos del expediente \*\*\*\*\*, relativo al juicio **Ejecutivo Mercantil** promovido por \*\*\*\*\*, endosatario en procuración de \*\*\*\*\*, en contra de \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal y \*\*\*\*\* en su carácter de avál, en ejercicio de la **acción cambiaria directa**, que se dicta al tenor de los siguientes:

### CONSIDERANDOS

**I.-** Dispone el artículo 1324 del Código de Comercio que: "Toda sentencia debe ser fundada en ley y si ni por el sentido natural ni por el espíritu de ésta se puede decidir la controversia, se atenderá a los principios generales de derecho, tomando en consideración todas las circunstancias del caso".

Así mismo, el artículo 1327 del mismo ordenamiento comercial prevé que: "La sentencia se ocupará exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas respectivamente en la demanda y en la contestación".

**II.-** Se asume competencia para conocer este juicio de conformidad con los artículos 1092 y 1094, fracciones I y III, del Código de Comercio, en virtud de que la accionante promovió y continuó su reclamo ante el suscrito, en tanto que la demandada no contestó la demanda, ni se inconformó en ese aspecto.

**III.-** Se declara procedente la vía ejecutiva mercantil, de conformidad con el artículo 1391, fracción IV, del Código de Comercio, en el que se establece que el procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en títulos de crédito, pues en la especie, el documento base de la acción satisface los requisitos del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para ser considerado como pagaré, mismo que tiene la naturaleza jurídica de título de crédito.

**IV.-** El actor \*\*\*\*\* demandó a \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal y \*\*\*\*\* en su carácter de avál, por tres títulos de crédito de los denominados pagarés los cuales se describen a continuación:

El primero con número 1/1 valioso por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional, por concepto de suerte principal; habiendo pactado, según lo dice, intereses moratorios a razón del cinco por ciento mensual.

El segundo con número 1/2 valioso por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional, por concepto de

suerte principal, habiendo pactado, según lo dice, intereses moratorios a razón del cinco por ciento mensual.

El tercero con número 1/3 valioso por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional, por concepto de suerte principal; habiendo pactado, según lo dice, intereses moratorios a razón del cinco por ciento mensual y por el pago de gastos y costas.

Sustentó su acción en el hecho de que en los días ocho de septiembre del dos mil dieciocho, cinco de enero del dos mil diecinueve y diez de mayo del dos mil diecinueve, los demandados \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal y \*\*\*\*\* en su carácter de avál, suscribieron a favor del actor \*\*\*\*\* , tres títulos de crédito denominados pagarés los cuales se describen a continuación:

El primero con número 1/1 valioso por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional, por concepto de suerte principal; con fecha de vencimiento el día nueve de diciembre del dos mil dieciocho.

El segundo con número 1/2 valioso por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional, por concepto de suerte principal, con fecha de vencimiento el día cuatro de marzo del dos mil diecinueve.

El tercero con número 1/3 valioso por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional, por concepto de suerte principal; con fecha de vencimiento el día once de agosto del dos mil diecinueve;

No se advierte de la literalidad de los documentos base de la acción, que respecto de los pagarés que se identifican con los números 1/1 y 1/3 se hubiesen pactado intereses, y en relación al pagaré enlistado con el número 1/2 se pactó una tasa de interés moratorio del cinco por ciento mensual.

En fecha dieciséis de julio del dos mil veintiuno, se llevo a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en que los demandados \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal y \*\*\*\*\* en su carácter de avál, visible a foja veinte de los autos, quienes fueron emplazados y requeridos de pago, quienes ante el Ministro Ejecutor manifestaron que sí reconocen las firmas que aparecen en la copia cotejada del documento como suya, que sí reconocen el adeudo y que sí reconocen su origen, pero en ese momento no contaban con cantidad alguna para realizar el pago.

Los demandados \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal y \*\*\*\*\* en su carácter de avál, no contestaron la demanda y por auto de fecha ocho de septiembre del dos mil veintiuno, se les declaró en rebeldía.

V.- Es procedente la acción cambiara directa en contra de los demandados \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal y \*\*\*\*\* en su carácter de avál, en la medida en que se sustenta en un documento mercantil de los denominados pagarés que reúnen los requisitos para ser considerados como tales en términos del artículo 170 de la Ley General de Títulos de Operaciones y Crédito, toda vez que los documentos indican que son tres pagarés y que contienen una promesa incondicional de pago a cargo de los demandados \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal y \*\*\*\*\* en su carácter de avál, los cuales se describen a continuación:

El primero con número 1/1 valioso por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional, por concepto de suerte principal; a favor del actor \*\*\*\*\* , con quien se obligó hacer el pago el día nueve de diciembre del dos mil dieciocho.

El segundo con número 1/2 valioso por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional, por concepto de suerte principal, a favor del actor \*\*\*\*\* , con quien se obligó hacer el pago el día cuatro de marzo del dos mil diecinueve, habiendo pactado intereses moratorios a razón del cinco por ciento mensual.

El tercero con número 1/3 valioso por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional, por concepto de suerte principal; a favor del actor \*\*\*\*\* , con quien se obligó hacer el pago el día once de agosto del dos mil diecinueve.

Luego, este tipo de documentos debe entenderse que resultan prueba preconstituida a favor de la actora, toda vez que contiene en sí mismo el derecho que se ejerce.

Al respecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro y texto es el siguiente:

**“TÍTULOS EJECUTIVOS. EXCEPCIONES CONTRA LA ACCIÓN DERIVADA DE LOS. CARGA DE LA PRUEBA.**- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1391, primer párrafo y fracción IV, del Código de Comercio, los títulos de crédito como el pagaré tienen el carácter de ejecutivos, es decir, traen aparejada ejecución, luego constituyen una prueba preconstituida de la acción ejercitada en el juicio, lo que jurídicamente significa que el documento ejecutivo exhibido por la actora, es un elemento demostrativo que en sí mismo hace prueba plena, y por ello si el demandado opone una excepción tendiente a destruir la eficacia del título, es a él y no a la actora a quien corresponde la carga de la prueba del hecho en que fundamente su excepción, precisamente en aplicación del principio contenido en el artículo 1194 de la legislación mercantil invocada, consistente en que, de igual manera que corresponde al actor la demostración de los hechos constitutivos de su acción, toca a su contraria la justificación de los constitutivos de sus excepciones o

defensas; y con apoyo en el artículo 1196 de esa codificación, es el demandado que emitió la negativa, el obligado a probar, ya que este último precepto establece que también está obligado a probar el que niega, cuando al hacerlo desconoce la presunción legal que tiene a su favor su colitigante; en ese orden de ideas, la dilación probatoria que se concede en los juicios ejecutivos mercantiles es para que la parte demandada acredite sus excepciones o defensas, además, para que el actor destruya las excepciones o defensas opuestas, o la acción no quede destruida con aquella prueba ofrecida por su contrario”. Época: Octava Época, Registro: 215748, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, Materia(s): Civil, Tesis: Página: 596.

Así las cosas, correspondía a la parte demandada acreditar el pago o cumplimiento de las obligaciones a su cargo y no demostrar al actor el incumplimiento, pues no se le puede obligar a demostrar un hecho negativo.

Cobra también aplicación la tesis de jurisprudencia definida por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que a continuación se cita:

**“PAGO O CUMPLIMIENTO, CARGA DE LA PRUEBA.** -El pago o cumplimiento de las obligaciones corresponde demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al actor”. Época: Octava Época, Registro: 225165, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1990, Materia(s): Civil, Tesis: Página: 593.

Sin embargo como ya se dijo la parte demandada no contestó la demanda y por ende no opuso excepciones y defensas y tampoco ofreció pruebas.

Por el contrario, fue la parte actora quien ofreció como prueba de su parte la documental, consistente en los documentos base de la acción, que como ya se dijo tiene el carácter de prueba preconstituida a su favor, es decir, demuestran la existencia de la obligación y la exigibilidad de su cumplimiento.

No obstante, debe decirse que los títulos de crédito como los pagarés que son base de la acción se rigen, entre otros, por el principio de literalidad, lo que quiere decir que las obligaciones a cargo del deudor no pueden ir más allá de lo expresamente pactado en el o los documentos. Lo anterior, es relevante en la medida que según se advierte del análisis de los pagarés que son base de la acción, en dos de ellos (los identificados como 1/1 y 1/3), no se pactaron intereses, de lo que se sigue que no puede pretenderse que el deudor pague una tasa moratoria del cinco por ciento, por no haberse obligado en esos términos.

Por otro lado, la parte actora ofreció como prueba la instrumental de actuaciones, consistente en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de fecha dieciséis de julio del dos mil veintiuno, la cual es visible a foja veinte de los autos, donde fueron debidamente emplazados los demandados \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal y \*\*\*\*\* en su carácter de avál, quienes ante el Ministro Ejecutor manifestaron que sí reconocen las firmas que aparecen en la copia cotejada del documento como suya, que sí reconocen el adeudo y que sí reconocen su origen, pero en ese momento no contaban con cantidad alguna para realizar el pago.

Lo anterior, constituye una confesión de su parte, conclusión que además se encuentra sustentada en la jurisprudencia firme emitida por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe:

**“CONFESIÓN JUDICIAL. ALCANCES DE LA PRODUCIDA EN LA DILIGENCIA DE EXEQUENDO.-** En el juicio ejecutivo mercantil el requerimiento de pago, durante la diligencia de exequendo como primera actuación judicial, es la intimación que por virtud de un mandamiento judicial, el ejecutor del juzgado con base en las facultades y la fe pública de la que se encuentra investido, dirige a una persona para que pague el adeudo contraído o para que, en su caso, manifieste lo que estime conducente en relación con tal requerimiento; por tanto, si en dicha diligencia, a la luz de los artículos 1212 y 1235 del Código de Comercio, el demandado admite deber a la actora determinada cantidad, es una declaración que constituye una confesión, ya que se acepta la verdad de un hecho susceptible de producir consecuencias jurídicas a cargo del obligado, sobre todo cuando se realiza de manera espontánea, lisa, llanamente y sin reservas; por ello si el reconocimiento del adeudo se hace en el momento en que el deudor es requerido del pago, tal declaración es precisamente la que implica la confesión, misma que deberá ser valorada de acuerdo con las reglas de apreciación de las pruebas y en conjunto con el restante valor probatorio constante en autos”. Época: Novena Época, Registro: 193192, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 37/99, Página: 5.

Finalmente, la parte actora ofreció como prueba de su parte la presuncional, que este Juzgador considera que opera a favor de la parte actora, la presunción que deriva del contenido del artículo 129 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, que señala: “El pago de la letra debe hacerse precisamente contra su entrega”, disposición legal aplicable al pagaré por mandato expreso del artículo 174 del mismo ordenamiento legal. De tal manera que si la parte actora tiene en su poder

los documentos base de la acción y reclama el pago, se presume que este no se ha efectuado.

Así las cosas, al no haber prueba que revele el pago del documento que se le reclama a los demandados \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal y \*\*\*\*\* en su carácter de avál, ni haber elemento de convicción que justifique el no pago del documento, debe concluirse que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 150 fracción II de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y se declara procedente la acción cambiaria directa intentada por el actor \*\*\*\*\*.

Con fundamento en dicho precepto legal se condena a los demandados \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal y \*\*\*\*\* en su carácter de avál, al pago de tres títulos de crédito denominados pagarés los cuales se describen a continuación:

El primero con número 1/1 valioso por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional, por concepto de suerte principal, a favor del actor \*\*\*\*\*.

El segundo con número 1/2 valioso por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional, por concepto de suerte principal, a favor del actor \*\*\*\*\*.

El tercero con número 1/3 valioso por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional, por concepto de suerte principal, a favor del actor \*\*\*\*\*.

#### **VI.- En cuanto a los intereses moratorios.**

Como ya se dijo la parte actora reclama el pago de intereses moratorios a razón del cinco por ciento mensual sobre la suerte principal de los documentos base de la acción.

El artículo 362 del Código de Comercio, establece la obligación de quien no cumple oportunamente con sus obligaciones de pagar a su acreedor intereses moratorios en términos de lo pactado.

En la parte que nos ocupa dicho precepto legal señala: “Los deudores que demoren del pago de sus deudas deberán satisfacer desde el día siguiente al del vencimiento, el interés pactado para este caso, o en su defecto el seis por ciento anual”.

Como puede verse y ya se ha dicho los documentos marcados con los números 1/1 y 1/3 no tienen pactados intereses y de ahí que no resulte exigible al deudor que pague intereses moratorios sobre esos documentos a razón del cinco por ciento mensual; sino que en términos del precitado artículo 362 del Código de Comercio la tasa exigible lo es del seis por ciento anual, a cuyo pago se condena a los demandados \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal y \*\*\*\*\* en su carácter de avál, sobre la suerte principal de cada uno de los documentos, causados a partir del día siguiente del vencimiento de los mismos, es decir respecto del pagaré 1/1

a partir del diez de diciembre del dos mil dieciocho y respecto del pagaré 1/3 a partir del doce de agosto del dos mil diecinueve y hasta el pago total de lo reclamado, previa regulación que se haga en la correspondiente etapa de ejecución de sentencia.

En relación al pagaré identificado con el número 1/2, se advierte que la tasa pactada es del cinco por ciento mensual, tasa que a juicio de esta autoridad sobrepasa lo que puede considerarse un interés no usurario, puesto que el cinco por ciento mensual se traduce en un interés anual del orden del sesenta por ciento.

No debe perderse de vista que la autoridad jurisdiccional está obligada a observar en todo momento el respeto a los derechos humanos, entre ellos a que los gobernados no sufran un abuso pecuniario del pago de los réditos respecto de los créditos que contratan.

En ese contexto debe decirse, no puede aprobarse un interés moratorio que represente anualmente el sesenta por ciento del saldo insoluto, en la medida que aún y cuando resulta ser una tasa de interés fija, se considera que ese pacto violenta directamente lo dispuesto por el artículo 1º, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 21 numeral tres de la Convención Americana de los Derechos Humanos, sin que obste que la parte demandada no haya planteado litis respecto de las pretensiones de la parte actora.

Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia definida por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente:

**“PAGARÉ. AUN CUANDO EL JUICIO SE SIGA EN REBELDÍA, EL JUZGADOR TIENE LA OBLIGACIÓN DE PROTEGER Y GARANTIZAR OFICIOSAMENTE EL DERECHO HUMANO DEL ENJUICIADO A NO SUFRIR USURA.-** En la jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 402, de título y subtítulo: "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que si el juzgador advierte que la tasa de intereses consignada en un pagaré es notoriamente excesiva, puede reducirla oficiosamente y prudencialmente, valorando las circunstancias particulares del caso y las actuaciones que tenga para resolver. Asimismo, enunció los siguientes parámetros guía para evaluar objetivamente el carácter excesivo del rédito: a) el tipo de relación entre las



partes; b) la calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se encuentra regulada; c) el destino o finalidad del crédito; d) el monto; e) el plazo; f) la existencia de garantías para el pago; g) las tasas bancarias de interés para operaciones similares a las analizadas; h) la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo; i) las condiciones del mercado; y, j) otras cuestiones que generen convicción en el juzgador. Ahora bien, la falta de contestación de la demanda no constituye un impedimento jurídico para analizar los referidos parámetros, porque, aunque el juicio se siga en rebeldía, el juzgador tiene la facultad y la obligación de proteger y garantizar oficiosamente el derecho humano del enjuiciado a no sufrir usura, de conformidad con los artículos 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal y 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, la falta de contestación de la demanda tampoco es un obstáculo práctico para que el juzgador conozca algunos de los referidos parámetros, pues aquellos que consistan en circunstancias particulares del caso (relación entre las partes; calidad de los sujetos; actividad del acreedor; destino, monto, plazo y garantías del crédito), pueden quedar revelados a través de los datos contenidos en la demanda y sus anexos, mientras que los relativos a indicadores financieros (tasas de interés bancarias y variación del índice inflacionario nacional), pueden constituir hechos notorios que no requieren de planteamientos ni pruebas de las partes, por encontrarse difundidos mediante publicaciones impresas o electrónicas oficiales”. Época: Décima Época, Registro: 2010893, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, Materia(s): Constitucional, Civil, Tesis: XXVII.3o. J/30 (10a.), Página: 3054.

Bajo esa óptica, este Juzgador debe regular el monto de los intereses moratorios para ajustarlos al marco Constitucional y Convencional en que impera la Protección a los Derechos Humanos.

Así las cosas, este Juzgador concluye que un interés moratorio que exceda del treinta y siete por ciento anual se encuentra en lo que puede considerarse un interés usurario y por ende debe regularse hasta ese límite, a efecto de armonizar no solo los numerales constitucionales y convencionales ya citados, sino además el diverso artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones y Crédito.

Por tanto, este Juzgador determina regular los intereses a cargo del demandado a un treinta y siete por ciento anual, es decir, un interés mensual del tres punto cero ocho por ciento.

A continuación se cita la tesis de jurisprudencia en que se sustenta tal determinación:



**“INTERÉS USURARIO. SE CONSIDERA A LA UTILIDAD POR MORA QUE EXCEDA DEL TREINTA Y SIETE POR CIENTO ANUAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN I, DE LA LEGISLACIÓN PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.-**

Conforme a la tesis de este órgano colegiado de rubro: "INTERESES MORATORIOS EN UN TÍTULO DE CRÉDITO. EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO QUE PERMITE SU PAGO IRRESTRICTO TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO DE PROHIBICIÓN LEGAL DE LA USURA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21, NUMERAL 3 DE LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Tomo 2, agosto de 2012, página 1735, es necesario establecer cuándo un rédito puede considerarse usurario, esto es, que transgrede los límites de lo ordinario o lícito. Así, atento a que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito ni el Código de Comercio prevén un límite para el pacto de intereses en caso de mora, es válido -de acuerdo a la supletoriedad de la codificación mercantil del Código Civil Federal- remitirnos, en primera instancia, al artículo 2395 de la indicada legislación sustantiva civil federal; sin embargo, de su lectura se advierte que prevé la reducción de los réditos, bajo la justificación en el juicio de la figura jurídica de la lesión, sin hacer referencia a intereses usurarios ni fijar un porcentaje en tal sentido. Por tanto, al tratarse la usura de un acto motivo de represión por las legislaciones penales, se destaca que el Código Penal Federal, en sus artículos 386 y 387, fracción VIII, prevén como usura la estipulación de intereses superiores a los "usuales en el mercado"; no obstante, debe observarse que la banca presta diversidad de servicios financieros, además de que el interés varía, de acuerdo al producto, y que los porcentajes anuales que cobran las instituciones financieras por réditos son extremos, entre los más bajos y altos en su cobro; de ahí que el elemento del cuerpo del delito de fraude por usura, a que se refiere el mencionado artículo 387, fracción VIII, del Código Penal Federal de "intereses superiores a los usuales en el mercado", se torne abstracto o impreciso para dar seguridad al gobernado de cuándo estará en condiciones de alegar que, en caso del cobro de un título y de la realización de operaciones de crédito, existe usura en el cobro de intereses moratorios. Ello es así, porque el Alto Tribunal ha sentado criterio en la tesis P. LXIX/2011 (9a.), que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, página 552, de rubro: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.", que cuando hay varias

interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos. Por tanto, atento al contenido de dicho criterio, en lo tocante a la interpretación de las normas positivas de derecho interno, se considera que una ley más acorde para la protección del derecho humano reconocido en el artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - que conmina a la prohibición en ley de la usura- es la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes, norma positiva que si bien no es federal, sí permite fijar un porcentaje certero y eficaz para la salvaguarda del derecho humano en comento, al disponer en su artículo 48, fracción I, que ello sucede cuando un interés convencional evidente o encubierto excede de un treinta y siete por ciento anual; de ahí que, para estar en condiciones de resolver si un rédito es usurario, es válida la remisión a dicha legislación estatal; máxime cuando las partes en la suscripción del título de crédito señalaron como lugar de pago la entidad de Aguascalientes, lo que, a la postre otorgó competencia a la responsable para conocer de la contienda en términos del artículo 1104, fracción I, de la codificación mercantil”. Época: Décima Época, Registro: 2001360, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, Tesis: XXX.1o.3 C (10a.), Página: 1734.

Consecuentemente, este juzgador regula los intereses moratorios reclamados, condenando a los demandados \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal y \*\*\*\*\* en su carácter de avál, al pago de una tasa del tres punto cero ocho por ciento mensual sobre la suerte principal a favor del actor \*\*\*\*\* , causados a partir del día siguiente del vencimiento del pagaré identificado con el número 1/2 valioso por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional, es decir, a partir del día diez de marzo del dos mil diecinueve y hasta el pago total de la suerte principal y que deberá ser cuantificado en la correspondiente etapa de ejecución de sentencia.

#### **VII.- En cuanto al pago de gastos y costas.**

Finalmente, aunque así lo solicita, no es procedente hacer condena al pago de gastos y costas a los demandados en la medida que la parte actora no obtuvo en su totalidad todo lo solicitado en esta sentencia, ya que hubo necesidad por parte de este juzgador de realizar un control de convencionalidad sobre el pago de intereses.

Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto es el siguiente:

**“COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN LOS CASOS EN QUE, AUN CUANDO PROCEDA LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA, EL JUEZ OFICIOSAMENTE REDUCE EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS POR CONSIDERARLOS USURARIOS, SIN QUE SEA RELEVANTE QUE EL DEMANDADO HAYA COMPARECIDO O NO AL JUICIO.**

Del precepto citado, se advierte que siempre se condenará en costas al que fuese condenado en juicio ejecutivo y al que lo intente si no obtiene sentencia favorable. Ahora bien, el término "condenado en juicio" alude a quien no obtuvo sentencia benéfica, ya sea el actor o el demandado; mientras que la expresión "no obtiene sentencia favorable" se refiere a la derrota o condena total, es decir, absoluta. En ese sentido, cuando en un juicio ejecutivo mercantil, la parte actora se beneficia de la procedencia de la acción cambiaria directa y, en su caso, demás prestaciones reclamadas, exactamente en los mismos términos en que fueron planteadas en la demanda, procede la condena en costas en términos del artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, pues se está ante una condena total. Ahora bien, cuando en la sentencia respectiva el juez, de manera oficiosa, reduce el monto de la suerte principal o de las prestaciones accesorias reclamadas, se está ante una condena parcial, pues se justificó la intervención judicial y puede considerarse que el actor no obtuvo plenamente una sentencia favorable, ni el demandado fue totalmente derrotado, ya que este último, con la reducción del monto a pagar con respecto a lo reclamado, obtuvo también una sentencia favorable. Así, si en un juicio ejecutivo mercantil, aun cuando procedió la acción cambiaria directa, el juez, en ejercicio del control convencional ex officio, reduce el pago de los intereses moratorios por considerarlos usurarios, no puede condenarse al pago de costas conforme al precepto legal citado, toda vez que la condena no fue total, al haber dejado de percibir el actor todo lo que pretendió en los montos que reclamó y al no tener que pagar el demandado la totalidad de la cantidad que se le reclamaba por concepto de intereses, sin que sea relevante que comparezca a juicio o no el demandado, pues aun si éste no contestó la demanda, debe entenderse que la actuación del juzgador constituye una oposición oficiosa a las pretensiones del actor. No obstante, este criterio sólo es aplicable en lo que se refiere a la improcedencia de la condena en costas en términos del artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, pues es posible que se den condiciones que activen la procedencia en términos de una diversa fracción del propio precepto, de su primer

párrafo, o del artículo 1082 del citado ordenamiento, quedando al prudente arbitrio del juzgador determinar lo procedente”. Época: Décima Época. Registro: 2015691. Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 73/2017 (10a.). Página: 283.

En efecto no obstante que se declaro procedente la vía ejecutiva mercantil, así como la acción cambiaria directa intentada, hubo necesidad de hacer un control oficioso de la convencionalidad a fin de ajustar los intereses moratorios pactados y de ahí se concluye que la parte actora no obtuvo sentencia favorable a la totalidad de sus pretensiones y de ahí que no se actualice la hipótesis prevista por el artículo 1084 fracción III del Código de Comercio.

Razón por la que se absuelve a la parte demandada al pago de gastos y costas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 1194, 1245, 1287,1294, 1302, 1303, 1305, 1321, 1323, 1324, 1325, 1327, 1328, 1329, 1330, del Código de Comercio, y de los artículos 29, 35, 150 fracción II, 152 fracción 1, 170, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se resuelve:

**PRIMERO.-** Este Juzgador se declara competente para conocer del presente asunto.

**SEGUNDO.-** Se declara procedente la vía ejecutiva mercantil y en que la parte actora \*\*\*\*\*, acredito los hechos constitutivos de su acción cambiaria directa, en tanto que los demandados \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal y \*\*\*\*\* en su carácter de avál, no dieron contestación a la demanda interpuesta en su contra y no opusieron excepciones y defensas.

**TERCERO.-** Se condena a los demandados \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal y \*\*\*\*\* en su carácter de avál, al pago del primer pagaré número 1/1 valioso por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional, por concepto de suerte principal, a favor de \*\*\*\*\*.

**CUARTO.-** Se condena a los demandados \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal y \*\*\*\*\* en su carácter de avál, al pago del segundo pagaré número 1/2 valioso por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional, por concepto de suerte principal, a favor de \*\*\*\*\*.

**QUINTO.-** Se condena a los demandados \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal y \*\*\*\*\* en su carácter de avál, al pago del tercer pagaré número 1/3 valioso por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional, por concepto de suerte principal, a favor de \*\*\*\*\*.

**SEXTO.-** Se condena a los demandados \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal y \*\*\*\*\* en su carácter de avál, a razón del seis por ciento anual sobre la suerte principal de cada uno de los documentos, causados a partir del día siguiente del vencimiento de los mismos, es decir respecto del pagaré 1/1 a partir del diez de diciembre del dos mil dieciocho y respecto del pagaré 1/3 a partir del doce de agosto del dos mil diecinueve y hasta el pago total de lo reclamado, previa regulación que se haga en la correspondiente etapa de ejecución de sentencia

**SÉPTIMO.-** Se condena a los demandados \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal y \*\*\*\*\* en su carácter de avál, al pago de una tasa del tres punto cero ocho por ciento mensual sobre la suerte principal a favor del actor \*\*\*\*\* , causados a partir del día siguiente del vencimiento del pagaré identificado con el número 1/2 valioso por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional, es decir, a partir del día diez de marzo del dos mil diecinueve y hasta el pago total de la suerte principal y que deberá ser cuantificado en la correspondiente etapa de ejecución de sentencia.

**OCTAVO.-** No condena a los demandados \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal y \*\*\*\*\* en su carácter de avál a pagar los gastos y costas a favor del actor \*\*\*\*\* , por las razones expuestas en la parte final del último considerando de esta resolución.

**NOVENO.-** Sáquese a remate el bien inmueble descrito en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de fecha dieciséis de julio del dos mil veintiuno, y con su producto hágase pago al actor \*\*\*\*\* , si los demandados \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal y \*\*\*\*\* en su carácter de avál, no dieron cumplimiento voluntario a esta sentencia dentro del término de ley.

**DÉCIMO.-** En términos de lo previsto en el artículo 73 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día trece de agosto del dos mil veinte se ordena se proceda a la elaboración y publicación de la versión pública de la presente sentencia siguiendo lo establecido en los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas de Sentencias y Resoluciones dictadas por los Juzgados y Salas del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.

**DÉCIMO PRIMERO.-** Notifíquese y cúmplase.

Así lo proveyó y firma el Juez del Juzgado Cuarto Mercantil Licenciado **Juan Sergio Villalobos Cárdenas**, quien actúa asistido de su Secretaria de Acuerdos Licenciada **Jenny Ruiz Ornelas** que autoriza y da fe.- Doy fe.

La resolución que antecede se notifica a las partes del proceso por estrados del Juzgado donde se fija la Lista de Acuerdos en fecha uno de octubre del dos mil veintiuno, en términos de lo que establece el artículo 1068 fracción III del Código de Comercio en vigor.- Conste.

L:JSVC/tgr

La Licenciada **Jenny Ruiz Ornelas** Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Cuarto Mercantil, hago constar y certifico que este documento corresponde a una versión pública de la sentencia definitiva del expediente **1541/2021** dictada en **treinta de septiembre del dos mil veintiuno** por el C. Juez Cuarto de lo Mercantil, conste de **veinte** fojas útiles. Versión pública elaborada de conformidad a lo previsto por los artículos 3 fracciones XII y XXV; 69 y 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, se suprimió: el nombre de las partes, el de sus representantes legales, sus domicilios y demás datos generales, así como nombres o datos de identificación de personas físicas o empresas y cuya intervención fue necesaria en este procedimiento información que se considera legalmente como confidencial o reservada por actualizárselo señalado en los supuestos normativos en cita. Conste.